EL MERCURIO

Fecha: 17/03/2024 Audiencia: 320.543 Sección: NACIONAL
Vpe: $8.920 Tirada: 126.654 Frecuencia: SEMANAL
Vpe pág: $13.136 Difusión: 126.654
Vpe portada: $13.136 Ocupación: 67,9%

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats:

"Dar la impresión de que se resuelven los problemas únicamente con militares en la calle es un engaño a la gente"

"Uno tiene que ser respetuoso de una profesión como la militar si los comandantes en jefe señalan que no es su función, que no están preparados para controlar el orden público", señala el edil, quien ha sido elegido en tres ocasiones.

GABRIEL PARDO

Zapatillas de lona rojas, camisa afuera, anteojos, pelo desordenado. Así aparece, enérgico, en un estilo ya reconocido para los vecinos de Huechuraba el alcalde Carlos Cuadrado Prats (PPD).

Saluda sonriendo y dice: "Estamos construyendo un planetario en la comuna". Desde la ventana de su oficina se puede ver la cúpula en ciernes de la nueva obra municipal.

Dentro de su oficina, lo primero que llama la atención son las fotos de su abuelo, el general Carlos Prats, quien fue ministro de Defensa y del Interior de Salvador Allende, asesinado por la Dina en septiembre de 1974.

Y también una larga lista de pequeñas fotos enmarcadas donde aparecen escritores como Francisco Coloane, María Luisa Bombal, Enrique Lihn o Jorge Luis Borges; músicos como Wagner, Verdi, Brahms; figuras políticas como Allende, Ricardo Lagos, Gladys Marín, Luis Emilio Recabarren.

El alcalde fue dirigente en sus años universitarios en Concepción, donde conoció a Sergio Micco, hoy exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. "Le tengo gran cariño y respeto", dice y critica las funas que ha enfrentado. "Lo conocí siendo él dirigente estudiantil y cuando ser dirigente era exponer la vida".

Cuadrado se tituló de periodista, es máster en Comunicación (U. Autónoma de Barcelona) y va a cumplir 12 años al mando del municipio. Pero no podrá repostularse por la nueva ley de límite a la reelección.

Crítico del actual tono del debate, cree que la política está perdiendo "su labor pedagógica".

Sin pelos en la lengua, esta semana se enfrentó con Techo-Chile diciendo que "no está haciendo lo que Chile hoy requiere". Se define "de izquierda" a secas, pero no tiene problemas en decir que la mayoría de los empresarios son "aventureros" o en alabar alguna medida de un alcalde opositor.

CRISTIAN CARVALLO

"Si yo llamo en Huechuraba a los militares y en un incidente mueren cuatro pobladores, ¿quién es el responsable?, ¿el Ejército de Chile o quien quiso que salieran a cumplir una función?".

"En Chile no se está reflexionando con base en los intereses de los ciudadanos. Se está discutiendo en función del "yo creo", "yo pienso", "me parece", "me dijeron". Aquí no se lee mucho, no se estudia mucho".

"Hay que ser muy prudente al momento de ofrecer alternativas que la gente puede visualizar como definitivas a un problema que no va a concluir solo por la presencia de los militares".

—Usted se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de que militares salgan a las calles para apoyar labores de seguridad luego que el alcalde Tomás Vodanovic lo solicitara en La Moneda para Maipú. ¿Por qué señaló que es una medida "grandilocuente" y poco efectiva?

—Cuando uno toma decisiones o hace propuestas, tiene que pensar en la eficiencia y en el resultado. Hace tiempo, no es solo Tomás Vodanovic, se dice esto de sacar a los militares, pero antes y ahora el tema es que todos sabemos que los militares en este momento solo pueden salir a la calle si se decreta un estado de excepción constitucional. Segundo, todos sabemos que los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que son los que más saben, ya señalaron que participar en el control del orden público no es su función y puede haber daños colaterales más graves. Y tercero, porque existe ya la discusión al interior del Congreso de una ley de infraestructura crítica que va a permitir legalmente poner a efectivos militares en determinados lugares.

—¿Es un error entonces solicitarlo ahora?

—Sin esta ley de infraestructura crítica, solo pueden salir con estado de excepción. Entonces, no hay una solución real al problema con lo que se está proponiendo o con lo que se está solicitando. Y, por otro lado, dar la impresión de que los problemas se resuelven únicamente con una medida muy fuerte como la salida de los militares es un engaño a la gente, porque todos sabemos que aunque los militares estén en determinados puntos la delincuencia va a seguir igual. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudente al momento de ofrecer alternativas que la gente puede visualizar como definitivas a un problema que no va a concluir solo por la presencia de los militares.

Cuadrado luego hace una pausa y comenta que en su comuna han bajado los delitos de alta connotación social en un trabajo conjunto con Carabineros, la PDI y los vecinos. Pero dice que la seguridad no se mejora solo con eso. Y agrega que disponen de buses para los niños que más faltan a clases, aire acondicionado y módulos dentales en las escuelas públicas, 42 disciplinas deportivas para los vecinos en sus recintos municipales.

—Se ha levantado un debate también respecto de la eventual responsabilidad de los uniformados si ocurre un incidente.

—Bueno, ahí tiene otro tema. Uno tiene que ser respetuoso de una profesión como la militar si los comandantes en jefe señalan que no es su función, que no están preparados para controlar el orden público, que pueden suceder situaciones complejas. Uno conoce el comportamiento pasado de Chile, cuando llamó a los militares a actuar y luego cuántos fueron los civiles que los llamaron a actuar y reconocieron lo sucedido. Por lo tanto, queman a los militares y luego se lavan las manos. Es complejo. Porque si yo llamo en Huechuraba a los militares y en un incidente mueren cuatro pobladores, ¿quién es el responsable?, ¿el Ejército de Chile o quien quiso que salieran a cumplir una función?

—¿Por qué cree que el Ejército podría tener problemas en el tema del orden público?

—El Ejército no anda con lacrimógenas, no anda con lumas, por lo tanto, pasado cierto límite de distancia, la única protección que tiene el soldado es disparar, y además tiene que cuidar el armamento del que dispone. Si anda con armamento de guerra, el objetivo quizás de algún delincuente es arrebatárselo.

—En este debate, ¿cómo ve la diferencia que ha mostrado el Presidente Boric sobre las Fuerzas Armadas y Carabineros respecto de sus dichos y críticas como diputado, cuando salió a las calles a increpar a uniformados cuando se decretó el estado de excepción duranter el estallido?

—Lo primero es que yo considero que quien cambia de opinión está rectificando un error pasado, y quien detentando el poder, como puede ser un Presidente, rectifica posición, merece todo el reconocimiento por cuanto está pensando lo mejor para la gente, independientemente del costo que puede significar para él que lo acusen de que cambió de posición.

—¿Cree que la aprobación de la ley de infraestructura crítica, que permitirá a los militares resguardar ciertos puntos, podría traer complicaciones?

—Yo creo que cuando el Presidente está proponiendo una ley de infraestructura crítica, lo que está haciendo es apoyar la salida de los militares con los costos que puede tener, pero muy acotado, para que el efecto negativo sea el menor posible. Por lo tanto, hay una reflexión en función de los ciudadanos, en términos de protegerlos, pero también a veces se requiere para mantener alguna infraestructura pública al resguardo de un ataque extranjero, del narcotráfico o de la delincuencia en la comuna.

—¿El crimen organizado está desafiando a los Estados?

—En esta guerra, el Estado no puede ser derrotado. Estamos con un Estado dividido enfrentando al crimen organizado, y uno no tiene que ser ingeniero nuclear para llegar a la conclusión de que quien combate dividido es derrotado.

—¿Por qué el Estado está dividido?

—Porque creo que el combate a la delincuencia común, al narcotráfico y al crimen organizado se asume desde la trinchera propia, en lugar de sumar y definir, al igual como se definen las relaciones internacionales, una política de Estado.

—¿Por qué no se logra eso?

—Yo creo que el tema es mayor. En Chile no se está reflexionando con base en los intereses de los ciudadanos. Se está discutiendo en función del "yo creo", "yo pienso", "me parece", "me dijeron". Aquí no se lee mucho, no se estudia mucho, muchas veces se votan leyes sin siquiera haberlas leído y, por lo tanto, hay una carencia de reflexión que conduce a resultados equívocos.

—Usted propuso subdividir comunas de alta población para que haya una mejor administración en materia de seguridad, educación o salud, pero fue criticado desde su propio sector.

—Yo creo que nuevamente se contesta o se oponen al titular. No buscan consultar cuál es el motivo por el que yo propongo esto que tiene cierta lógica. Primero se desconoce que en Chile eso es legal y se ha hecho en 11 oportunidades. Desde el 90 hasta ahora, se han creado 11 comunas, y en ninguna de ellas uno puede decir que no era necesaria. Concón, Hualpén, Chiguayante... ¡Huechuraba! Era el gran Conchalí y se subdividió en Recoleta, Independencia, Conchalí y Huechuraba. ¿Te imaginas yo gobernando esas cuatro comunas con 600.000 habitantes juntos y en una superficie territorial gigantesca? Es imposible.

—¿Cuánto afecta para la estrategia de seguridad que el director de la PDI aparezca involucrado en un eventual delito de entrega de información secreta?

—Creo que afecta mucho y de múltiples formas a la fe pública. En la lucha del Estado contra el crimen organizado significa debilitar una estrategia que no puede tener ningún flanco abierto. A nivel de la PDI, imagino el golpe que significa esta situación para los funcionarios subalternos que ven acusado y procesado a su director general. Para los ciudadanos el daño provocado es la pérdida de confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, creo que los ciudadanos valoran que, pese a la gravedad del hecho y a la investidura de la autoridad acusada, sea el propio Estado el que detecta, actúa y hace público el problema. Creo que la forma en que reaccionó el Estado fue transparente, rápida y efectiva, y eso permite que el daño causado sea menor. Incluso, puede reforzar la idea de que el Estado tiene mecanismos de control efectivos y eficientes en contra de quienes incumplen la ley, independientemente de la investidura que detenten.